



300 personas a espaldas de la sociedad

El regreso al Polígono Sur de las 35 familias que vagaron por Sevilla durante cuatro meses cierra un problema que las instituciones no supieron afrontar

En el último día del mes pasado, cerca de 300 personas —95 de ellas menores— iniciaron su regreso a las casas que habían dejado a la fuerza en marzo tras la muerte accidental de un joven. Una regla cruel y ajena al Estado de derecho les había forzado a dejarlo todo para vivir al raso. Y la falta de coordinación entre los organismos correspondientes de cada una de las administraciones hizo el resto. Cuatro

meses de intemperie, falta de higiene, escasa alimentación y niños sin poder ir a clase. Un drama de una magnitud que suena a pasado lejano pero que ha sucedido hace unos días.

La situación de estas personas tuvo su primer apoyo en los esfuerzos del defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que resaltó la situación de los numerosos menores, privados de su educación al tiempo que de su

hogar. Los debates sobre la pertinencia de su regreso al Polígono Sur, encabezados por las opiniones del comisionado especial, Jesús Maeztu, y seguido por una serie de decisiones puntuales y, en buena medida, cortoplacistas de algunas consejerías e incluso del Ministerio de Defensa —que ordenó el desalojo de los chabolistas de un terreno de su propiedad—, ocuparon el espacio y las energías de las ac-

ciones públicas. En un caso que, además, tiene su origen en el desmantelamiento del núcleo chabolista de Los Bermejales con la entrega de bolsas de dinero (42.000 euros) en mano. Con ese dinero, estas familias se trasladaron a viviendas en el Polígono Sur. Un pasaporte al desastre, tal y como se ha comprobado después.

Chamizo se muestra muy crítico con la actuaciones de las

instituciones estatales, municipales y autonómicas. "Ha habido falta de reflejos y yo creo que también ha habido un exceso de confianza en que las soluciones iban a venir rodadas".

El regreso de las familias a sus domicilios tampoco parece que vaya a ser la solución final. Ninguno de los problemas ajenos al Estado de derecho se han solucionado.

PÁGINAS 2 Y 3

Un drama de integración, éxodo y abandono

Las administraciones no han sabido reaccionar ante una situación extrema

ÁNGELES LUCAS
Sevilla

Casualidad letal. Una bala perdida entre otros disparos impactó en un menor y lo mató. Fue el pasado 29 de marzo, en el Polígono Sur, en Sevilla. Desde ese día, 35 familias, más de 300 personas, entre las que había 95 menores, han vagado cuatro meses por Sevilla viviendo sin luz y sin agua. Los desalojaron hasta en siete ocasiones de lugares distintos. Nómadas a la fuerza.

Estas 300 personas son familiares de los que dispararon al menor. Temían represalias de tíos y primos del fallecido, y abandonaron sus residencias sin más dilación. Lo primero que hizo la policía fue precintar las viviendas que dejaron, sabían que la mayoría de ellas estaban ocupadas de forma ilegal.

El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, se percató de que una multitud había empezado a montar infraviviendas bajo el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache. Es un descampado de matojos, con culebras, ratas, cristales, basura, sin sombra, sin electricidad, sin agua. Entre esta maraña, Chamizo descubrió 95 menores que estaban faltando a clase. Y puso una queja de oficio por el grupo de menores. Los servicios sociales de la Junta y el Ayuntamiento tardaron más de diez días en cuantificar los niños que estaban faltando a clase.

Aun así, la Consejería de Educación fue la primera en actuar. Propuso fletar un autobús para llevar a los pequeños al colegio. El comisionado para el Polígono Sur, Jesús Maetz, no aprobó la idea. Repetía una y otra vez que era peligroso. Lo que finalmente pasó fue que los niños estuvieron

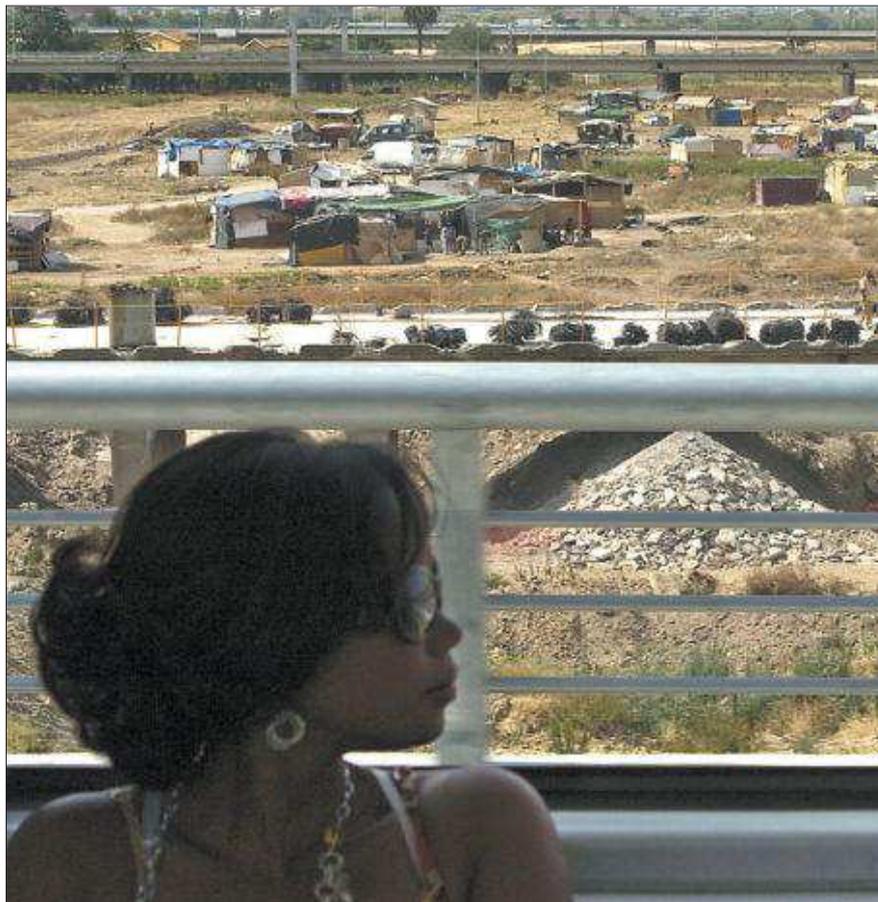
tres meses sin ir a clase. Añoraban los cuadernos, se los pedían a los periodistas. Posteriormente, Educación informó a la fiscalía de la situación de los menores. No mucho más.

Ya hay seis personas encarceladas por el asesinato. Dos de ellas fueron detenidas en Madrid, y otras cuatro personas armadas, en el asentamiento chabolista, vivían entre los niños.

Pasaban los días y las semanas ante la desidia institucional. La Junta debía coordinar y el 11 de mayo, tras 42 días de sed y absentismo, la Delegación del Gobierno regional en Sevilla tomó el mando para coordinar a consejerías, Gobierno central y Ayuntamiento. Aunque las primeras reuniones se hicieron esperar hasta dos semanas: 14 días más. Con estas reuniones, se tenía la pretensión de tomar decisiones conjuntas ante la situación de "extrema complejidad" que provocaban estas familias, incluso tenía visos de formalizarse para tratar el chabolismo en Andalucía. Fue de un optimismo irreal. La mesa se disolvió a mediados de junio. Ya no había coordinación, ni portavocía. Vacío institucional.

Y justo a mediados de junio llegaba el final de curso escolar. Chamizo urgió a que, al menos, se evaluara a los pequeños. Educación los llevó una semana a un centro. Allí se duchaban, comían y jugaron algo. Esa medida fue la que sirvió para evaluar a los menores. Un trámite excepcional, según Educación.

Que no promocionaran de curso fue también un problema para el Instituto Polígono Sur, adscrito al colegio Andalucía, de donde son la mayoría de los niños. Si los chicos no acaban sexto, no hay alumnos suficientes para formar los mismos grupos que ha



El asentamiento chabolista en el que han vivido 300 personas durante más de tres meses, bajo el puente de hierro de

La mesa creada por Gobierno, Junta y Ayuntamiento se disolvió en un mes

Hasta 95 menores han estado más de tres meses sin asistir al colegio

habido en este curso. Los problemas se extienden a más de una entidad. Crecen.

Y el defensor seguía pidiendo soluciones. Que se estudiara el

caso de cada familia de forma individualizada. La Consejería de Vivienda abrió una oficina para estudiar la titularidad de las casas una a una y advirtió de que hasta septiembre no tendrían resueltos los expedientes. Eso implicaba pasar el verano a 40 grados.

Los chabolistas se desesperaban e intentaron volver al Polígono Sur, pero la mediación de asociaciones, la presión de los vecinos, que no querían que volvieran, y la familia del menor fallecido, que transita por el barrio vestido de riguroso negro, disuadieron a los chabolistas y les empujaron a volver al asentamiento.

Actuó una alta institución: el Ministerio de Defensa. Les envió

a los chabolistas una orden de desalojo del descampado porque ser de su propiedad. Las 300 personas se fueron diligentes. Era 3 de julio. Ese día, empezó una peregrinación bajo el sol de 300 personas por cinco descampados de la ciudad. La ambulancia se llevó a una chica que sufría una insolación. Durante 12 horas, estuvieron escoltados por la policía, que tenía que cumplir la orden municipal de no permitir que se asentaran en ningún terreno municipal. Se fueron a una base dependiente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Allí estuvieron unos días en furgonetas, hasta que les echaron, después fueron a San Juan de Aznalfarache, y les volvieron a echar. Definitiva-

Una solución económica y un fracaso social

LUIS MEYER
Sevilla

La voluntad de acabar con los asentamientos chabolistas es un asunto en el que las distintas administraciones llevan trabajando varios años, aunque no siempre haya estado impulsada por la búsqueda de una mayor dignidad para aquellas familias que malviven en los poblados de chapa, madera y cartón.

La Junta de Andalucía puso en marcha en 1997 el Plan Integral de Erradicación del Chabolismo en Andalucía, coordinado por la entonces llamada Consejería de Obras Públicas con participación de las de Empleo, Salud, Educación y Asuntos Sociales. El consejero de Vivien-

da, Juan Espadas, aseguraba el pasado 3 de febrero en una comparecencia ante comisión parlamentaria, que los principales frutos de ese plan han sido la desaparición de los núcleos de chabolas de Playa de la Misericordia y Puente de los Morenos, en Málaga, y de San Diego, Los Perdigones y Los Bermejales, en Sevilla. Pero uno de los éxitos señalados entonces por el consejero puede estar en la raíz de la situación de estas personas.

De los tres núcleos chabolistas que oficialmente han desaparecido —aún quedarían los de El Vacie, con casi cuatro décadas de existencia, y Torreblanca—, el de San Diego es el que figura como la operación ejecutada

con mayor rigor y, a la par, con mejores resultados.

En las actuaciones sobre los núcleos de Los Perdigones y de Los Bermejales, los intereses urbanísticos actuaron como catalizador para acelerar la disponibilidad de los terrenos. En ambos casos se recurrió a la entrega en metálico de dinero a los chabolistas (30.000 y 42.000 euros, respectivamente) como compensación por el abandono del lugar en el que vivían. El reparto de bolsas de dinero cuenta con muy pocos defensores y muchos detractores. El informe especial del Defensor del Pueblo Andaluz de diciembre de 2005 y titulado *Chabolismo en Andalucía* destaca esta opción como una de las cuatro que recomienda re-

chazar. "Muy excepcionalmente se ha cumplido el compromiso adquirido [la compra de una vivienda con el dinero recibido] y lo único que ha ocurrido ha sido que se ha trasladado el problema de un lugar a otro, incluso agravando la situación social de los barrios o zonas en los que se han realojado".

En el caso de Los Perdigones, el nivel de éxito fue mayor al estar acompañada de un sólido trabajo asistencial y de asesoramiento para aquellos que recibían el dinero. Menos de lo que recibieron los chabolistas de Los Bermejales. Y eso que había un plan de realojo acordado entre los organismos municipales y la junta de compensación integrada por los constructores que

aprovecharían económicamente la zona. Pero eso era muy lento para el mapa de desarrollo urbanístico que algunos tenían.

Los euros que recibieron los residentes en el núcleo de Los Bermejales en julio de 2004 en bolsas de plástico se utilizaron para hacerse con pisos en el Polígono Sur.

No sólo estaba cerca, sino que era lo único que se les ocurría a estas personas, a las que les faltaron orientación y tutela institucional y social. Su llegada a la zona despertó recelos primero y enfrentamientos después. La situación explotó con la muerte fortuita del 29 de marzo y el éxodo de cuatro meses de cerca de 300 personas, entre ellas, 95 menores.



in de Aznalfrache, visto desde el metro de Sevilla. / GARCÍA CORDERO

mente, regresaron a los bajos del puente de San Juan. Donde comenzaron el éxodo meses antes.

Y la descoordinación seguía latente. Por un lado, IU y PSOE aprobaron en junta de gobierno una dotación de 305.000 euros para hacer talleres con los menores en verano. Pero se cancelaron ante el nomadismo de las familias. A la administración local se le hacía imposible localizarlos. Y por otro lado, la Consejería de Bienestar e Igualdad Social reaccionó el 13 de julio y ofreció a los menores y a las madres un centro en Bellavista para que pudieran pasar el verano. Ambas medidas fueron rechazadas por las familias, que se negaron en rotundo a separarse.

Los padres deciden dejar a los menores con familiares tras más de tres meses

El comisionado pide a la Administración que actúe de forma urgente en el barrio

Los padres tomaron entonces, sólo entonces y no antes, la decisión de llevar a los menores con sus familias extensas; tíos, abuelos, amigos... Temían que la fiscalía, que había sido informada del rechazo de la propuesta de Bienestar, se llevara a los menores. A final de julio sólo quedaron los adultos en el asentamiento.

Pero una chica de 15 años se

debió colar con ellos, cuando los chabolistas cuentan que allí murió el bebé de la menor el pasado 29 de julio por un golpe de calor. La versión oficial es que la cría falleció en una vivienda y de muerte súbita. Sea como fuere, esto ha servido de excusa para que las 35 familias, las 300 personas, los 95 menores, hayan vuelto paulatinamente a las viviendas del Polígono Sur. Rompieron los precintos y ya han sido denunciados por la Junta.

Pero llevan una semana, a metros del luto y sin hablar con la familia del fallecido, que está intranquila con la presencia de los chabolistas, al igual que todo el barrio. Los vecinos no quieren que estas 35 familias vivan allí, y se lo han hecho saber al Comisionado, que ha pedido en un comunicado la inmediata y urgente implicación de las administraciones para solucionar el problema. Porque justo esta semana pasada, y con un mes de antelación, la Consejería de Vivienda ha resuelto que sólo una de las familias chabolistas tiene su casa legal. Las demás, nada.

Estas 35 familias son las mismas que en 2004 recibieron en mano una bolsa de plástico con 42.000 euros para abandonar el asentamiento chabolista de Los Bermejales. El Ayuntamiento les dio el dinero sin acompañarlo de medidas de integración. Burló el Plan de Erradicación del Chabolismo y el programa elaborado por el Defensor del Pueblo. Con estos 42.000 se fueron al Polígono Sur, aunque el Ayuntamiento les dijo que no lo hicieran, pero era lo más barato de la ciudad.

Ahora el problema está en el barrio. Y la administración, de vacaciones.

JOSÉ CHAMIZO Defensor de pueblo andaluz

“Ha habido falta de reflejos y se ha dejado que se resuelva solo”

Á. L.
Sevilla

José Chamizo es defensor del pueblo andaluz y del menor. Acumula títulos, premios y regalos en su despacho. Es doctor *honoris causa* y tiene la medalla de Andalucía, pero sólo al hablar se vislumbra que una de sus grandes escuelas ha sido la calle. Trabaja contra el chabolismo, las drogas y el absentismo y fue el primero en denunciar la situación de las 300 personas huidas del Polígono Sur. Su principal preocupación: los menores.

Pregunta. ¿Cree que la Junta podría haber actuado de otra manera para no llegar a esto?

Respuesta. Si hombre, por supuesto. Han faltado reflejos, agilidad. Se ha pensado que los problemas se resuelven por sí mismos. Y los problemas, si no intervienen las administraciones, no siempre se resuelven por sí mismos. Yo creo que ha habido un exceso de confianza en que las soluciones iban a venir rodadas.

P. ¿Cómo se podía haber hecho mejor?

R. Acelerando. Después de un mes y medio, haber hecho un estudio individualizado de las familias, viendo las que podían volver, y si no, buscar alternativas.

P. ¿Y con los menores?

R. Pues estudiar cada caso también, hay muchos que estaban yendo al colegio. Y si había menores absentistas pues hay que utilizar los mismos recursos que se utilizan con todo el mundo. Ahí no hay excepción.

P. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI la sociedad permita que pase esto?

R. Precisamente, el siglo XXI no es para tocar campanas. Es una sociedad que por una parte habla de solidaridades pero a la hora de la verdad la gente se echa para atrás. El problema es que nadie quiere vivir con chabolistas, aunque hayan pasado por un proceso educativo. Y no se puede comprender ¿no?, eso no se facilita nada.

P. ¿Qué debería existir para que no haya 300 personas vagando durante cuatro meses?

R. Yo llevo hablando más de cinco años de la necesidad de construir albergues para estas situaciones de emergencia. Distintos de los centros de transeúntes, que, afortunadamente, ya en Sevilla funcionan adecuadamente.

P. ¿Por qué no los han llevado a estos centros?

R. Porque no había sitio, ésa es la razón oficial.

P. El problema de estas familias viene desde la bolsa que se les entregó con 42.000 euros sin más medidas.

R. Evidentemente. Hubo una gestión nefasta. Debería de haberse incorporado un plan que estaba hecho pero no se ejecutó. Se tiró por el camino más fácil y se están pagando las consecuencias. En los temas sociales los políticos tienen que estudiar más, porque tienen cierto desconocimiento.



José Chamizo, en el balcón de la sede, en Sevilla. / GARCÍA CORDERO

“Ahora se pagan las consecuencias de una gestión nefasta en Los Bermejales”

P. ¿Hay falsa tolerancia con determinados sectores sociales?

R. Estamos todos obligados a respetar el marco jurídico.

P. ¿Pero, cree que se cumple por igual?

R. No. Hay una excesiva mantentida tolerancia que al final está perjudicando a ellos mismos. Porque hay muchísimas personas del pueblo gitano que viven absolutamente integrados y manteniendo sus señas de identidad. Ni ellos ni ellas quieren que haya tolerancia de este tipo. Crea la desigualdad.

P. ¿Es duro que ellos mismos provoquen una situación y la arreglen, de momento?

R. Me parece absurdo.

P. ¿Dónde queda la democracia y el estado de derecho?

R. La cosa queda mal. ¿Tantos años para esto, para volver al principio? Esto es una mala gestión. No digo que se haga desde la maldad, pero sí desde el dejar pasar a ver qué sucede.

P. ¿Quién debería estudiar las familias una por una?

R. Yo creo que una mesa de trabajo conjunta, como la que había. El Ayuntamiento, Asuntos Sociales, Vivienda, Educación, Salud...

P. Pero la mesa no funcionó.

R. Pero tiene que funcionar. Hay cosas que no se pueden dejar para mañana. Y hay muchas cosas que han dejado para mañana. Y así no se pueden arreglar.

P. ¿Cómo ha respondido la Administración a la oficina?

R. Ha sido una respuesta positiva, nos dan lo que le pedimos. Pero yo no quiero que tengan respuesta conmigo, quiero que tengan respuestas con ellos.

P. ¿Y ahora qué?

R. Ahora quien tiene el problema es el barrio y el comisionado, que están trabajando mucho. Soluciones de momento no hay, nada más que lo que se ve. No sé qué solución le van a dar.

P. ¿Volverán los menores al colegio en septiembre?

R. Eso espero, ellos no tienen por qué pagar esta locura. Hay niños que iban bien. Además, es la única solución que tiene esto. Ellos son el futuro de un cambio. Y después de esta experiencia, no sé cómo habrán quedado sus cabezas.